



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA
Expediente No.: 11001 33 35 010 2019 00057 00

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2019 00057 00
ACCIONANTE: NAHIR CECILIA MONTAÑA DUARTE
ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
VINCULADA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El Despacho se pronunciará sobre la necesidad de realizar la audiencia inicial programada dentro del presente proceso.

Como es de conocimiento, la emergencia social, ecológica y económica ha generado una serie de medidas encaminadas a promover el distanciamiento social y el trabajo a través de medios electrónicos. El Gobierno Nacional las anunció en la parte motiva del Decreto 417 de 2020, luego se ordenaron en los artículos 3º del Decreto 491¹ de 2020 y el 3º (numeral 13) del Decreto 531² de 2020, y finalmente se desarrollaron a través del Decreto 806³ de 2020. En últimas, el Juez fue facultado para que profiriera sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia presencial o virtual, es decir, antes de celebrar audiencia. La facultad aplica en los siguientes eventos: (i) cuando el asunto sea de puro derecho; (ii) cuando no se requieran pruebas para decidir excepciones previas y dictar sentencia, según la lectura de los artículos 12 y 13 del Decreto 806 de 2020 en armonía con los artículos 179 y 181 del CPACA, y 100 y 101 del CGP. En tal virtud, se procede a verificar en el presente asunto si están dadas las condiciones para prescindir de las audiencias del juicio oral.

En el presente proceso se pretende que, como producto de la nulidad del acto acusado, se ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías. Este tipo de asunto no es de puro de derecho porque se requiere tener los datos necesarios acerca del régimen de cesantías aplicable y de la mora. Por esta razón, se procederá a determinar si las pruebas que obran en el expediente son suficientes para decidir las excepciones previas y dictar sentencia anticipada.

¹ “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

² “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.

³ “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.



I. EXCEPCIONES PREVIAS.

Las entidades demandada y vinculada plantearon excepciones previas, de las cuales, la Secretaría del Juzgado surtió el correspondiente traslado⁴, frente al cual la contraparte guardó silencio. El Despacho observa que no se requieren decretar pruebas para proceder a decidir las anteriores exceptivas, para lo cual se seguirá el siguiente orden: Se enunciará la excepción propuesta, luego el argumento que la sustenta, y finalmente se motivará la decisión.

1. DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

1.1 Inepta demanda por no demostrar la ocurrencia del acto ficto alegado.
Argumenta que el artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, dispone que toda demanda deberá tener como anexo la prueba del acto ficto que se pretende alegar, y para el caso concreto, se incumplió con dicho requisito al no presentar prueba que evidenciara que la administración no dio respuesta en el término correspondiente. Agrega que la accionante mediante derecho de petición debió requerirle a la administración un informe sobre la respuesta a la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria, en la que ésta manifestara si efectivamente se pronunció o no.

La exceptiva no tiene vocación de prosperidad, toda vez que como bien lo indica la accionante en la demanda, el 22 de marzo de 2018 radicó petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitándole el reconocimiento y pago de la sanción mora, sin que éste se hubiera pronunciado dentro del término de ley, lo que generó que en la demanda pretenda que se declare la ocurrencia del silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto; no siendo de recibo para esta instancia judicial someter a la demandante nuevamente a acudir a la administración para que a través de otro derecho de petición le informe o certifique si se pronunció ante la primera petición presentada, desnaturalizando tal derecho fundamental, y la obligación que tiene la entidad de dar una respuesta de fondo sobre lo solicitado.

1.2 Ineptitud de la demanda por falta de integración de litisconsorte necesario.
Manifiesta que no se integró en debida forma el contradictorio al no haberse demandado a la Secretaría Distrital, entidad encargada de la expedición y notificación del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías a la demandante, y sobre quien recae la responsabilidad por mora en el pago de la prestación.

Para resolver se tiene que, a través de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serían administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tenga más del 90% del Capital.

⁴ Folio 57



A su vez, el artículo 5° de la citada ley señaló en su numeral 1°, que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tendría como objeto “Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.”

Además, el artículo 9° de la ley en mención dispuso que las prestaciones sociales que pague el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, y que esta función se delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, quien debe responder por el pago de las prestaciones sociales de los educadores es la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Así las cosas, se declarará no probada la excepción previa de INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO.

2. DE LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

2.1 Falta de legitimación por pasiva. Indicó que no tiene la responsabilidad de la expedición de las resoluciones y mandatos de reconocimiento de las prestaciones a las que tienen derecho los docentes, agrega que solo actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Como ya se mencionó en precedencia, a través de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serían administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tenga más del 90% del Capital otorgándole esa función a la Fiduprevisora; en tal sentido, esta agencia judicial no concibe desvincular a dicha Entidad.

En razón a lo señalado la exceptiva propuesta será negada, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar para establecer responsables por la eventual mora generada en el pago de cesantías.

II. PRUEBAS PARA DECIDIR DE FONDO

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A., solicitan se oficie a la Secretaría de Educación de Bogotá para que informe si dio respuesta a la petición elevada por la parte actora el 22 de marzo de 2018 donde solicitó el reconocimiento y pago de sanción moratoria por la cancelación tardía de unas cesantías, con el propósito de desvirtuar el acto ficto alegado.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA
Expediente No.: 11001 33 35 010 2019 00057 00

Esta prueba se negará, bajo los mismos argumentos expuestos al resolver la excepción denominada “Inepta demanda por no demostrar la ocurrencia del acto ficto alegado”.

En cuanto al Ministerio Público no solicitó se decretara prueba alguna.

Para el caso de la referencia, se advierte que las pruebas obrantes en el plenario, son las pertinentes, que le permiten al Despacho pronunciarse de fondo, de manera que no hay debate probatorio, encontrándose aplicable la figura de la sentencia anticipada prevista en el numeral 1º del artículo 13 de Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, en consecuencia, se correrá traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión según lo dispuesto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011⁵.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones previas de INEPTA DEMANDA POR NO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL ACTO FICTO ALEGADO e INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORTE NECESARIO, propuestas por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SEGUNDO.- Declarar no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, planteada por la Fiduciaria La Previsora S.A.

TERCERO.- INCORPORAR al proceso con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de prueba que acompañan la demanda y la contestación a la misma, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO.- NEGAR las pruebas solicitadas por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria

⁵ ARTÍCULO 181. AUDIENCIA DE PRUEBAS. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días.

Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: 1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley. 2. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario.

En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. (Subrayado fuera de texto).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA
Expediente No.: 11001 33 35 010 2019 00057 00

La Previsora S.A., por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente auto.

QUINTO.- Se prescinde de la audiencia inicial programada dentro del presente proceso, por las razones antes expuestas.

SEXTO.- Se ordena a las partes que presenten por escrito sus alegatos de conclusión dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, que se surtirá en los términos previstos en el Decreto 806 de 2020. Dentro de igual término, el Ministerio Público podrá presentar el concepto si a bien lo tiene.

SÉPTIMO.- La sentencia anticipada se proferirá por escrito dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término para alegar de conclusión, en aplicación del artículo 13 (Num. 1º) del Decreto 806 de 2020 en armonía con el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en **ESTADO No.** _____ notifico a las partes la
providencia anterior hoy _____ a las 08:00 A.M.

LUIS ALEJANDRO GUEVARA BARRERA
Secretario

mqc